

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	MARIA VICTORIA OSPINA MORALES
DEMANDADO	Colpensiones y Protección S.A.
RADICACIÓN	05-001-3105-010-2020-00174-01
DECISIÓN	Niega solicitud de cita presencial

Medellín, catorce (14) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Dentro del proceso de la referencia, la apoderada judicial de la demandante, Dra. Laura Estrada Calle, remitió al correo del despacho el siguiente mensaje:

*"(...) mediante la presente solicito comedidamente reunión presencial a fin de evaluar una situación muy particular de mi caso, lo anterior en aras proteger los derechos fundamentales de mi cliente a un mínimo vital y a una pensión digna.*

*Agradezco de corazón si me fuese posible atenderse antes de la emisión de la sentencia, a fin de proceder a tomar una decisión de fondo sobre la situación de mi clienta."*

Petición que se debe **rechazar al resultar notoriamente improcedente**, en la medida que no puede olvidar la profesional que el proceso judicial es un método dialéctico concebido para permitir que el juez pueda tomar su decisión tras haber oído a ambas partes desde una posición de, **igualdad, imparcialidad e independencia**, y en esa medida, una de sus principales garantías consiste en que el juez, para formar su convencimiento, **solamente tenga en cuenta lo que sucede en el proceso**, como mecanismo para aislarlo de otros influjos que eviten las posibilidades de defensa de las partes o, de una de las partes, luego **es inaceptable conversar reservada y**

**separadamente con uno de los litigantes sobre el asunto a su cargo**, pues claramente ello rompe con tales principios y con el debido proceso.

Y es que no puede perderse de vista lo recalcado por la jurisprudencia constitucional respecto a la **independencia e imparcialidad de los jueces como garantía del debido proceso**, así en providencia SU-174-2021 el máximo órgano constitucional explicó:

22. El artículo 29 de la Carta Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, que ha sido definido como un conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico **"a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia"**. De ese modo, quien asume la dirección del procedimiento tiene la obligación de "observar, en todos sus actos, la plenitud de las formas previamente establecidas en la Ley o en los reglamentos".

23. Esta Corporación ha identificado el grupo de garantías que conforman el debido proceso, sintetizándolas así: i) el derecho a la jurisdicción; ii) el derecho al juez natural; iii) el derecho a la defensa; iv) el derecho a un proceso público desarrollado dentro de un tiempo razonable; y v) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, **sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas**.

24. La Corte ha señalado que la administración de justicia debe descansar siempre sobre dos principios básicos y esenciales, a saber, **la independencia y la imparcialidad** de los jueces. Al respecto, se ha pronunciado en los siguientes términos:

**"La independencia**, como su nombre lo indica, hace alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones (...) a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales, [mientras que **la imparcialidad**] se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial".

**25. La doctrina sobre la materia ha explicado que la independencia implica que "cada juez, individual y personalmente, con prescindencia absoluta de la opinión de los demás, tiene garantizada, y debe así practicarla, la atribución soberana para resolver cada caso concreto con total autonomía de criterio".** De lo anterior se desprende que el juez, por un lado, es soberano para resolver los asuntos bajo su conocimiento, es decir, "con absoluta sujeción a la Constitución y a las leyes que en su consecuencia se dicten, con objetividad, honestidad y racionalidad"; y por el otro, tiene el "deber-atribución de mantenerse ajeno e inmune a cualquier influencia o factor de presión extrapoder, esto es, los que provienen del periodismo o la prensa, de los partidos políticos, del amiguismo, de las coyunturas sociales, de los reclamos populares y de cualquier particular".

**26. En cuanto a la imparcialidad ha sostenido que "es el modo de posicionarse frente al conflicto objeto del proceso y a la pretensión de las partes, de manera que sea equidistante de las mismas y distante del conflicto, a fin de poder analizar y concluir con prudente objetividad cuál es la más ecuánime y justa manera de dictar la sentencia. Juez es sinónimo de imparcialidad, es la esencia misma inherente a la justicia".**

(...)

**28. La importancia de la imparcialidad como atributo esencial de la administración de justicia ha sido destacada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que aquella implica "que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia. ..."**

Siendo estas razones suficientes, **para negar de plano la solicitud de reunión presencial privada con la magistrada ponente solicitada por la apoderada de la parte demandante**, pues la **...situación muy particular de mi caso, lo anterior en aras proteger los derechos fundamentales de mi cliente a un mínimo vital y a una pensión digna**, debe ser planteada – por la profesional - mediante escrito allegado dentro de las oportunidades de ley (para el caso etapa de alegaciones), para garantizar así **los principios de igualdad y contradicción**, como presupuestos del debido proceso **de las accionadas**, ello en los términos de los artículos 48 y 49 del C. P. T. y de la S.S., que en su orden, a la letra disponen:

***El juez asumirá la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite.***

*Las partes deberán comportarse con lealtad y probidad durante el proceso y el juez hará uso de sus poderes para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta o ineficaz del litigio, o cuando se convenza de que cualquiera de las partes o ambas se sirven del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley.*

En concordancia con los artículos 42 – 2 y 43 -2 del Código General del Proceso, que en su texto establecen:

***Son deberes del juez: ... 2) Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que ese Código le otorga.***

Y,

***El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción: ...rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente.***

## NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL**  
**Magistrada**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -  
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados  
No. 45 del 15 de marzo de 2023

**consultable aquí:**

[https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147\\_5](https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147_5)